

Medellín, veinticuatro (24) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Proceso	ACCIÓN DE GRUPO
Radicado	05001 31 03 011 2006 00237 08
Demandantes	RICARDO ECHAVARRÍA CANO, OLGA LUCÍA ESPINOSA VÉLEZ, CAMILO POSADA RAAD, MANUELA POSADA RAAD, JAIME ALONSO RAVE MONTOYA y otros vecinos de los proyectos de vivienda CANTO DE LUNA Y RINCÓN DEL BOSQUE.
Demandados	VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S., ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS AIA S.A., GANANCIAL S.A., CAUTELAR Y CÍA S.A., FIDUCIARIA DEL VALLE S.A., BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA S.A. HOY SCOTIABANK COLOMBIA S.A.
Juzgado Origen	ONCE CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Procede el Despacho a resolver sobre la solicitud de pruebas presentada por la demandada VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S., dentro del término de ejecutoria del auto que admitió la apelación.

1. ANTECEDENTES

Mediante memorial del 26 de septiembre de 2023, la recurrente VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S. solicitó el decreto de pruebas en esta instancia con fundamento en lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 327 del CGP, aduciendo que se trata de pruebas sobre hechos o situaciones configuradas en momento posterior a la oportunidad para pedir o aportar pruebas en primera instancia¹, así:

1. Información sobre la ubicación geográfica de los inmuebles con matrículas inmobiliarias 001-209652 y 001-530426, toda vez que entre los años 2006 a 2010 que se surtió la etapa de pruebas en primera instancia, no existían *“los sistemas de geodatabases que permiten evidenciar en los mapas de datos abiertos del municipio de Envigado la localización de las vereda y su delimitación”*, lo cual considera trascendente en aras de establecer que dichos bienes se encuentran en una vereda diferente a la zona de presunta afectación por la que fue condenada.
2. Certificados de tradición y libertad de los bienes inmuebles que se detallan en la sentencia de primera instancia como de propiedad de los accionantes, a fin de establecer que actualmente, varios de ellos, no son los propietarios de dichos predios y, en consecuencia, no se encuentran legitimados por activa.

¹ Ver carpeta 02SegundaInstancia / Archivo 07MemorialSolicitudPruebas

3. Informes elaborados por la firma Tecnisuelos desde el año 2013 hasta 2023, en los que se acredita la condición de estabilidad de la Vereda Santa Catalina, sin afectación alguna que hoy limite los predios de la zona; precisando que los mismos no pudieron ser aportados al proceso, en tanto la etapa probatoria feneció mucho antes de 2012; pretendiendo con ello establecer, que no existen actualmente afectaciones de ninguna clase a los predios de los accionantes que hagan presumir la inutilidad de sus inmuebles, como fue declarado en la sentencia de primera instancia.
4. Documentos prediales de los bienes de los accionantes, que acreditan el valor catastral considerable de los mismos, que corresponde a predios de condiciones de aprovechamiento y uso normales para el sector, sin afectación alguna.

Réplica de los demandantes²

La parte demandante aportó memorial en el que deprecó no decretar las pruebas solicitadas en esta instancia, en tanto no es el escenario natural del debate probatorio, además, lo pretendido no se enmarca en ninguno de los supuestos excepcionales contemplados por el legislador, toda vez que:

1. Se pretende desvirtuar la calidad de integrantes del grupo a algunos de los demandantes, sin que esto constituya un hecho posterior a la etapa de decreto y práctica de pruebas, máxime que los sistemas de “*geo-databases*” no son los únicos medios para establecer la ubicación de los predios.
2. Conforme la ley 472 de 1998, la legitimación para interponer la acción de grupo la tiene “*todo aquel que ha sufrido un perjuicio que sea indemnizable*”, por lo que todos los indemnizados tienen derecho a ser reconocidos en la acción de grupo sin que sea necesaria la verificación de los actuales propietarios de los bienes.
3. Que la decisión de primera instancia se basó en diversos informes técnicos allegados al proceso, en tanto la etapa probatoria se cerró sólo en el año 2022, siendo el último de ellos el elaborado en el año 2019 por el Grupo Solum, pudiendo la parte demandada haber aportado los informes hoy pretendidos, al menos hasta el año 2019 en el trámite de objeción por error grave del dictamen pericial de José Hilario López.
4. Lo referente al valor catastral de los predios pudo ventilarse en el traslado del dictamen pericial de cuantificación de perjuicios que se dio en 2019.

² Ibid. Archivo 18MemorialPronunciamiento

2. CONSIDERACIONES

La disposición normativa del artículo 327 del Código General del Proceso, respecto a la práctica de pruebas en segunda instancia es taxativa, es decir, que su procedencia debe de ceñirse únicamente a los siguientes eventos:

“Artículo 327. Sin perjuicio de la facultad oficiosa de decretar pruebas, cuando se trate de apelación de sentencia, dentro del término de ejecutoria del auto que admite la apelación, las partes podrán pedir la práctica de pruebas y el juez las decretará únicamente en los siguientes casos:

- 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo.*
- 2. Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió.*
- 3. Cuando versen sobre hechos ocurridos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrarlos o desvirtuarlos.***
- 4. Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la parte contraria.*
- 5. Si con ellas se persigue desvirtuar los documentos de que trata el ordinal anterior. (...)” (Se resalta)*

Por lo que esta Sala Unitaria pasa a realizar el análisis de cada una de las pruebas solicitadas a la luz de la normatividad invocada:

1. Con relación a la información sobre la ubicación geográfica de algunos de los inmuebles presuntamente afectados, ha de indicarse que no se trata de un hecho ocurrido con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, en tanto que, independiente del sistema que se pretenda utilizar para determinar su ubicación, aquella no pudo haber mutado en el curso del proceso; entonces habrá de estarse a las pruebas obrantes en el expediente con tal fin.
2. De la prueba de la calidad de propietarios actuales de los demandantes en aras de desvirtuar su legitimación por activa, ha de recordarse que pese a que los presuntos cambios de propietario se hayan dado en el curso del proceso, incluso después de la oportunidad para pedir pruebas, la legitimación según concepto de *Chiovenda*³, “*consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva)*”; es decir, que aquella habrá de analizarse de cara

³ *Instituciones de Derecho Procesal Civil, I, Pág. 185.*

al momento en el que se interpuso la demanda y conforme a la normatividad que regula la materia, que para el caso específico determina como titulares de la acción a *"las personas naturales o jurídicas que hubieren sufrido un perjuicio individual"*⁴. Sin que entonces pueda predicarse que dichos cambios se constituyan en hechos nuevos que deban ser probados en el trámite de esta instancia.

3. En lo que a los informes de estabilidad del terreno hace referencia, se advierte que el juzgado de primera instancia mediante auto del 18 de octubre de 2018⁵, requirió a las partes para que aportaran prueba pericial a fin de resolver una objeción por error grave frente a un dictamen presentado previamente, y que en parte, las preguntas que este debía resolver tenían relación con dicha desestabilización. De manera que, hasta ese momento, la parte demandada tuvo oportunidad de presentar los informes que hoy pretende se decreten como prueba, sin que en aquella etapa hubiera hecho uso de ello, pues dejó fenecer el término otorgado por el Despacho para presentar dicho dictamen sin aportarlo, y pese a que presentó recursos de reposición y queja frente a la negativa del despacho de extender el plazo para ello, todos le fueron resueltos en forma desfavorable.
4. Finalmente, en lo que a los informes prediales se refiere, se advierte que en auto del 12 de octubre de 2021⁶ el Despacho corrió traslado a los dictámenes de perjuicios obrantes en el expediente, a lo que esta parte respondió recorriendo el traslado y formulando objeción por error grave⁷, sin que para ello aportara los informes hoy pretendidos como prueba, pese a que alega la importancia de estos para determinar los perjuicios.

En conclusión, para esta Sala Unitaria, no se configuran los presupuestos contenidos en la norma a fin de proceder al decreto de las pruebas pretendidas en segunda instancia, toda vez que, contrario a lo afirmado por la parte demandada, los documentos aquí aportados o no constituyen prueba de hechos nuevos acaecidos con posterioridad al decreto de pruebas en primera instancia, o bien, tuvieron la oportunidad de ser aportados en aquella, sin que así se hiciera, tal como se analizó frente a cada prueba pretendida.

De suerte, que resulta improcedente acceder al decreto de las pruebas pretendidas, en tanto, se insiste, no se configura ninguna de las causales

⁴ Ley 472 de 1998 artículo 48.

⁵ Ver cuaderno principal parte 3 en físico folios 1469-1471 (folios no digitalizados)

⁶ Ver ruta carpeta 01PrimeraInstancia Archivo 2.9. 2006-00237 TRASLADO DICTÁMENES DE PERJUICIOS NOT14OCT2021

⁷ Ibid. Archivo 3.1. 2006-00237 OBJECCIÓN DICTAMEN 19OCT2021

invocadas y previstas en el artículo art. 327 del CGP, que hagan posible su decreto, por ello, se despachará negativamente su solicitud.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad oficiosa del Juez, si a ello hay lugar.

Por lo expuesto, el Despacho,

3. RESUELVE:

NEGAR la solicitud probatoria en segunda instancia de la demandada VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S.

NOTIFÍQUESE



JULIO NÉSTOR ECHEVERRY ARIAS
Magistrado